Expediente No.: ****
Quejosa/Víctima: QV1
Víctima: V2
Resolución: Recomendación
No. 14/2019
Autoridad
Destinataria: Fiscalía General del Estado de
Sinaloa

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 04 de septiembre de 2019

Dr. Juan José Ríos Estavillo
Fiscal General del Estado de Sinaloa

1. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 102, Apartado B y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, 4° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 5°, 13° fracciones I, II y III, 22 fracción V, 52, 95, 97, 98 párrafo primero y segundo, 100, 102, fracción II y 110 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa; así como 1°, 2°, 4°, 6°, 11, 14 fracción V, 89, fracción III, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 99 de su Reglamento Interior, ha analizado el expediente número **** relacionado con la queja en donde figura como víctima de violación a derechos humanos V1.

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 87 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, y 10 de su Reglamento Interior. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso que ésta dicte las medidas de protección correspondientes.

3. Por otro lado, en la presente Recomendación la referencia a distintas dependencias e instancias de gobierno se hará con acrónimos o abreviaturas para facilitar su lectura y evitar su constante repetición, las cuales podrán ser identificadas como sigue:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	ACRÓNIMO
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa	Comisión Estatal

Fiscalía General del Estado de Sinaloa antes Procuraduría General de Justicia del Estado	Fiscalía
Agencia Tercera del Ministerio Público del Fuero Común de Mazatlán, Sinaloa	Agencia
Dirección de Servicios Periciales e Investigación Criminalística Región Sur	Dirección

I. HECHOS

4. El 19 de febrero de 2019, esta Comisión Estatal recibió un escrito suscrito por QV1, a través del cual reclamó actos que consideraba violatorios de sus derechos humanos y de V2, iniciándose el expediente de queja número ****.

5. En dicho escrito, QV1 refirió que el día 10 de marzo de 2013, V2 fue atropellado por una persona que conducía un vehículo a exceso de velocidad, lo cual trajo como consecuencia su fallecimiento.

6. Con motivo de tales hechos, QV1 manifestó que presentó denuncia y/o querrela ante la Agencia, por el delito de homicidio culposo en contra de la persona que atropelló a su esposo y, que a la fecha, desconocía el estado de su denuncia, ya que han transcurrido cinco años aproximadamente, sin que la autoridad determine conforme a sus obligaciones la procedencia o improcedencia de la misma, señalando que recibe puras evasivas cada vez que acude a la Agencia, tales como que no se encuentra el servidor público que lleva su caso y que la última ocasión, el personal de la representación social le dijo que ya dejara de moverle a ese asunto y que no volviera a presentarse en ese lugar.

7. Finalmente, QV1 señaló que también la Agencia recibió denuncia de la persona que atropelló y mató a su esposo V2, que derivó en el inicio a la Averiguación Previa 1 por los delitos de daños y lesiones culposas.

II. EVIDENCIAS

8. Escrito de queja de fecha 19 de febrero de 2019, suscrito por QV1, en el cual, denunció presuntas violaciones a sus derechos humanos y a los de V2, por parte de servidores públicos adscritos a la Fiscalía.

9. Oficio número ****, de fecha 22 de febrero de 2019, a través del cual, se solicitó a AR1, un informe relacionado con los hechos motivo de la queja.

10. Oficio número ****, recibido por esta Comisión Estatal, el día 8 de marzo de 2019, a través del cual, AR1 informó que la Averiguación Previa 1 inició el 10 de marzo de 2013, a raíz del informe policial elaborado por oficiales de la Policía Federal, a través del cual, V2 fue puesto a disposición de la Agencia en calidad

de detenido, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones y daños culposos en accidente de tránsito tipo choque, en agravio de la integridad física y el patrimonio económico de C1; posteriormente, QV1 con fecha 3 de abril de 2013, presentó denuncia por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito tipo choque, cometido en agravio de V2, en contra de C1. Asimismo, señaló que la Averiguación Previa 1 se encontraba en trámite, quedando a cargo en un principio de AR3 y AR4, y que posteriormente quedaría a su cargo y de AR2; finalmente, solicitó una prórroga para remitir copias certificadas de las actuaciones que integran la referida averiguación previa.

11. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión Estatal el día 11 de marzo de 2019, a través del cual, AR1 remitió copia certificada de las actuaciones que integran la Averiguación Previa 1, entre las cuales, se advierte que obran las siguientes diligencias:

- 11.1.** Oficio número ****, de fecha 10 de marzo de 2013, a través del cual se comunicó a la superioridad el inicio de la Averiguación Previa 1.
- 11.2.** Oficio número **** de fecha 10 de marzo de 2013, suscrito por un Inspector de la Policía Federal, mediante el cual remite la denuncia de los hechos contenidos en el dictamen técnico de hecho de tránsito número ****, elaborado por los Oficiales integrantes de la citada Policía Federal.
- 11.3.** Acuerdo de inicio de fecha 10 de marzo de 2013, emitido por AR3, el cual no se encuentra firmado.
- 11.4.** Oficio número ****, de fecha 10 de marzo de 2013, por medio del cual se solicita custodia policiaca para V2, quien se encontraba hospitalizado en el Hospital General de Mazatlán.
- 11.5.** Diversos oficios de fecha 11 de marzo de 2013, relacionados con la solicitud del dictamen médico, valoración de daños, de placas fotográficas, de estudio toxicológico y de abuso de drogas.
- 11.6.** Dos diligencias de fecha 10 de marzo de 2013, en las cuales se ratifica el informe policial por los oficiales integrantes de la Policía Federal.
- 11.7.** Declaración de C1 como parte ofendida, de fecha 11 de marzo de 2013 en la que presenta denuncia y/o querrela en contra de V2.
- 11.8.** Notas de cuenta de fecha 11 y 12 de marzo de 2013, a través de las cuales se recibieron y agregaron los diversos dictámenes periciales.
- 11.9.** Fe ministerial de la unidad motriz de C1, de fecha 12 de marzo de 2013.
- 11.10.** Acuerdo de libertad bajo las reservas de ley del indiciado, de fecha 12 de marzo de 2013 y el oficio respectivo.
- 11.11.** Fe ministerial de la bicicleta de V2, de fecha 13 de marzo de 2013.
- 11.12.** Comparecencia de C1, en su carácter de ofendida, en la que solicitó la entrega del vehículo, de fecha 14 de marzo de 2013.

- 11.13.** Acuerdo de 15 de marzo de 2013, en el que se ordena constituirse en el Hospital General “Martiniano Carvajal” a efecto de practicar la diligencia en vía de fe ministerial del cadáver de V2.
- 11.14.** Diversos oficios de fecha 15 de marzo de 2013, relacionados con la solicitud de placas fotográficas de cadáver, de estudio químico del tipo sanguíneo del occiso, de huellas dactilares y de autopsia.
- 11.15.** Fe ministerial de cadáver de 15 de marzo de 2013.
- 11.16.** Dos comparecencias solicitando entrega de cadáver de V2, de fecha 15 de marzo de 2013.
- 11.17.** Acuerdo para entrega de cadáver y oficio respectivo, ambos de fecha 15 de marzo de 2013.
- 11.18.** Notas de cuenta de fecha 15 de marzo de 2013, en la que se recibieron y agregaron los diversos dictámenes periciales practicados a V2.
- 11.19.** Diversas declaraciones testimoniales de fechas dos, tres, cuatro y cinco de abril de 2015.
- 11.20.** Escrito de denuncia y/o querrela de QV1, por la comisión del delito de homicidio culposo cometido en contra de la vida de V2.
- 11.21.** Acuerdo y ratificación del escrito de querrela, de fecha 03 de abril de 2013.
- 11.22.** Acuerdo de tres de abril de 2013, en el que QV1 acepta los beneficios de la Ley de Protección a Víctimas referente a la atención psicológica.
- 11.23.** Declaración de dos testigos de cinco y cuatro de abril del mismo año.
- 11.24.** Acuerdo de 10 de diciembre de 2013, en el que se ordena practicar peritaje de causalidad de tránsito terrestre.
- 11.25.** Oficio número ****, girado a AR5 por AR4.
- 11.26.** Dictamen de casualidad terrestre, de fecha 23 de abril de 2014, emitido por AR6 y AR7.
- 11.27.** Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2017, en el que AR1 solicita a AR5 la práctica de peritaje de causalidad de tránsito terrestre.
- 11.28.** Oficio número ****, dirigido a AR5, relacionado con una nueva solicitud de causalidad de terrestre, el cual fue notificado el 2 de junio de 2017.
- 11.29.** Oficio número ****, con clave ****, de fecha 02 de enero de 2018, a través del cual, AR8 informa la imposibilidad de llevar a cabo la pericial solicitada por falta de elementos para emitir el dictamen.
- 11.30.** Acuerdo de fecha 15 de marzo de 2018, mediante el cual, AR2 solicita copia del video de la cámara de vigilancia ubicada en el lugar de los hechos y el oficio respectivo dirigido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
- 11.31.** Oficio ****, de fecha 20 de marzo de 2018. Mediante el cual, el Delegado del Sub-Centro de Comando Zona Sur, informa a AR2, que si cuenta con cámara instalada en el lugar de los hechos, pero que el rango de las video grabaciones de la base de datos comprendía del 20

de febrero de 2018 al 20 de marzo de 2019, por lo que no es posible atender dicha petición.

11.32. Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2018, en el que AR1 acordó solicitó a AR9, la práctica de una pericial de causalidad de tránsito terrestre.

11.33. Oficio número **** dirigido a AR9, en el que se solicita la práctica del peritaje de causalidad de siniestros.

11.34. Acuerdo recordatorio de fecha siete de marzo de 2019, en el que, AR1 solicita nuevamente a AR9, la práctica de la pericial de causalidad de tránsito terrestre.

11.35. Oficio recordatorio número ****, de fecha siete de marzo de 2019, en el que se requiere a AR9 de manera urgente la práctica de la pericial en cuestión.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

12. El 10 de marzo de 2013, se inició la Averiguación Previa 1 ante la Agencia, en donde figura como probable responsable V2, por la comisión de los delitos de daños y lesiones culposas en agravio de C1, derivado de un accidente de tránsito tipo choque.

13. Dicho percance vial, trajo como consecuencia, la muerte de V2, y ante ello, el tres de abril de 2013, la Agencia recibió el escrito de denuncia de QV1, por la probable comisión del delito de homicidio culposo cometido en agravio de V2.

14. La citada Averiguación Previa 1, a la fecha de rendido el último informe a ésta Comisión, esto es, el 11 de marzo de 2019, aún continuaba en trámite y con diligencias pendientes por desahogar.

15. De la revisión minuciosa de las diligencias que componen la Averiguación Previa 1, se advierte que, dentro de la misma, se han dejado pasar periodos bastantes prolongados, sin practicarse diligencia alguna tendiente a esclarecer los hechos, así como la obstaculización de la función del Ministerio Público por parte de los peritos adscritos a la Dirección, al dilatar la práctica de la pericial de causalidad de tránsito terrestre solicitada.

16. Lo anterior, ha traído como consecuencia, violaciones a los derechos humanos de QV1, especialmente a su derecho de acceso a la justicia, al estar acreditada la marcada dilación en la que se ha incurrido en la integración de la aludida indagatoria, las omisiones y el esclarecimiento de los hechos, que conlleve a resolverla.

IV. OBSERVACIONES

17. En el presente caso, la Comisión Estatal se abocará a analizar e identificar si las autoridades locales en materia de procuración de justicia, que han intervenido en la investigación de los hechos delictivos motivo de la queja, han llevado a cabo los procedimientos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y si están siendo respetuosas de los derechos humanos.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho de acceso a la justicia.

a) HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Dilación en la integración de averiguación previa.

18. El derecho de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero, también, debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, de la citada Constitución, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos, pues del proceder diligente y eficaz del Ministerio Público, depende en materia penal el acceso a la vía jurisdiccional penal.

19. Esta obligación de investigar y perseguir los actos delictivos debe asumirse por el Estado, como una obligación propia y no como un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos.

20. Ello es así, porque en el respeto a los derechos fundamentales, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas.

21. Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:

Época: Novena Época

Registro: 163168

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: P. LXIII/2010

Página: 25

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA.

El derecho de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. Ello es así, porque en el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

22. Conforme a la normativa aplicable a los casos analizados en la presente resolución, que rige la actuación de las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos, el Agente del Ministerio Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho.

23. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, refiere que su función se regirá por los principios de unidad de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; lo cual supone un accionar por parte de los servidores públicos que laboran en la institución del Ministerio Público, el cual debe ser con apego estricto a las leyes que están vigentes, en beneficio de la sociedad y procurando en todo momento no salirse del margen legalmente establecido, en beneficio de los gobernados.

24. El diverso artículo 5, inciso d), de la citada Ley Orgánica, define a la eficiencia como la consecución de la misión encomendada a la institución del Ministerio Público, a través del ejercicio pronto y expedito de las atribuciones legales que corresponden a la institución.

25. Al respecto, el artículo 3° del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, establece que el Ministerio Público en el ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción penal, deberá **practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos** y en su caso acreditar la probable responsabilidad, así como la reparación del daño, situación que evidentemente no aconteció en el caso relacionado con la Averiguación Previa 1. En el mismo tenor, se pronuncia el artículo 59, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Sinaloa.

26. Es por ello que el Ministerio Público debe llevar a cabo un trabajo objetivo, eficiente y profesional en cada uno de los aspectos que importan en una investigación, ya que de esa manera puede garantizar a las personas una procuración de justicia acorde a los principios de la legalidad establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

29. Al respecto, los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3° del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa; y, 6, fracción V y 9, fracción IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, establecen como facultades del Ministerio Público de Sinaloa, la obligación de practicar dentro de

la averiguación previa las diligencias necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos que la originó.

30. Que dicho servidor público, debe encuadrar su actuación en la estricta observancia de la legalidad durante el desarrollo de sus funciones; sin embargo, esta Comisión Estatal advirtió que en el caso que se analiza, la representación social ha realizado de manera irregular y deficiente las acciones jurídicas necesarias dentro de la referida indagatoria, ello en perjuicio de las víctimas.

31. Así, del análisis realizado a la Averiguación Previa 1, se advierten irregularidades por parte de AR1, AR2, AR3, AR4, en perjuicio de QV1 y V2, el haber dejado de indagar oportunamente las diferentes líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y de resolver lo que en derecho proceda.

32. En efecto, tomando en cuenta la evidencia documental remitida por AR1, se desprende lo siguiente:

- **10 de marzo de 2013:** Inicio de la Averiguación Previa 1 ante AR3, por el delito de daños y lesiones culposas cometido en agravio de C1, así como la recepción y ratificación del informe policial con detenido por parte de los Oficiales de la Policía Federal, además de la solicitud de custodia policiaca para V2.
- **11 de marzo de 2013:** Solicitud y recepción de diversos dictámenes periciales, así como la declaración de la ofendida.
- **12 de marzo de 2013:** Recepción de diversos dictámenes periciales, fe ministerial del vehículo de la ofendida, acuerdo de libertad bajo reservas de ley del indiciado y el oficio girado a la autoridad correspondiente.
- **13 de marzo de 2013:** Fe ministerial del vehículo del indiciado, comparecencia de la ofendida para la entrega del vehículo y el acuerdo para practicar diligencia en vía de fe ministerial del cadáver.
- **15 de marzo de 2013:** Solicitud y recepción de diversos dictámenes periciales practicados al occiso, fe ministerial del cadáver, diligencias de entrega del cadáver a los familiares y sus respectivas declaraciones.
- **2 de abril de 2013:** Declaraciones testimoniales.
- **3 de abril de 2013:** Acuerdo y ratificación del escrito de denuncia y/o querrela de QV1 ante AR3, por el delito de homicidio culposo cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de V2, así como la recepción de una declaración testimonial, además el acuerdo en el que QV1 acepta los beneficios de la Ley de Protección a Víctimas del Delito y el oficio girado a la autoridad correspondiente.
- **4 y 5 de abril de 2013:** Declaraciones testimoniales.
- **10 de diciembre de 2013:** Acuerdo de solicitud a AR5 de la pericial de causalidad de tránsito terrestre y el oficio girado a senda autoridad.

- **23 de abril de 2014:** Recepción del dictamen de causalidad de tránsito terrestre emitido por AR6 y AR7.
- **31 de mayo de 2017:** Acuerdo emitido por AR1 mediante el cual solicita a AR5 la pericial de causalidad de tránsito terrestre y el oficio girado a senda autoridad.
- **2 de enero de 2018:** Recepción del informe rendido por AR8 en el que señala la imposibilidad que le asiste para emitir el dictamen solicitado, debido a la falta de información y elementos técnicos para su emitir dicho dictamen pericial.
- **15 de marzo de 2018:** Acuerdo de solicitud del video grabación de la cámara de vigilancia ubicada en el lugar de los hechos y el oficio girado a la autoridad correspondiente.
- **23 de marzo de 2018:** Recepción del informe señalado en el punto anterior.
- **21 de mayo de 2018:** Acuerdo de solicitud a AR9 de la pericial de causalidad de tránsito terrestre y el oficio girado a senda autoridad.
- **7 de marzo de 2019:** Acuerdo recordatorio a AR9 de la pericial de causalidad de tránsito terrestre y el oficio recordatorio girado a senda autoridad.

33. De lo anterior, se tiene que, después iniciada la Averiguación Previa 1, AR3 realizó diversas y continuas diligencias hasta el 5 de abril de 2013, fecha en que se recibieron diversas declaraciones testimoniales; posteriormente a esas diligencias, no existe constancia alguna de que se haya llevado a cabo una efectiva investigación del delito, sino hasta el día 10 de diciembre de 2013, cuando se acordó la solicitud de la pericial de causalidad de tránsito terrestre, es decir, un periodo de inactividad de **aproximadamente siete meses**.

34. Posteriormente, los servidores públicos a cargo del caso, abandonaron la investigación, ya que **transcurrieron aproximadamente cuatro meses de inactividad**, es decir, sin que se practicara alguna diligencia y/o actuación tendiente a esclarecer los hechos, pues fue hasta el 23 de abril de 2014, cuando se recepcionó el dictamen de causalidad terrestre emitido por AR6 y AR7.

35. Posterior a ello, se observa otro período de inactividad que data desde el 23 de abril de 2014 hasta el 31 de mayo de 2017, fecha en que AR1 acordó la solicitud del peritaje de causalidad de tránsito terrestre, esto es, **aproximadamente 36 meses más** sin practicar diligencia alguna.

36. Asimismo, se advierte que, después de la diligencia del 31 de mayo de 2017, al 2 de enero de 2018, fecha en la que se recepcionó el informe de rendido por AR8, sobre la pericial solicitada, **transcurrieron aproximadamente siete meses más de inactividad procesal** dentro de la citada averiguación previa.

37. Así pues, se practicaron diversas actuaciones dentro de la indagatoria penal hasta el 21 de mayo de 2018, y, **aproximadamente 9 meses después**, el siete de marzo de 2019, se acordó girar un oficio recordatorio a AR9, solicitando la práctica de la pericial de causalidad de tránsito terrestre.

38. En conclusión, se encuentran dentro de la Averiguación Previa 1, periodos de inactividad relevantes, los cuales, comprenden lapsos de aproximadamente de cuatro, siete, nueve y treinta y seis meses, respectivamente.

39. Asimismo, no pasa desapercibido que en el informe rendido a esta Comisión Estatal, el día 11 de marzo de 2019, AR1 informó que la averiguación previa en cuestión aún se encontraba en trámite, por lo que, de la fecha de inicio de la misma —10 de marzo de 2013— a la fecha de rendido dicho informe, **habían transcurrido más de 72 meses, sin que se emitiese alguna resolución dentro de la misma.**

40. Así, poniendo en contexto todo lo anterior, tenemos que después de aproximadamente seis años de iniciada la investigación, la Fiscalía, aún no ha esclarecido si los hechos son o no constitutivos de delito, y en su caso, si está acreditada la participación de alguna persona en ellos, en gran medida, por los prolongados y múltiples periodos de inactividad en la investigación del caso.

40. Sumado a lo anterior, esta Comisión Estatal también observa la dilación injustificada por parte de AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9 en realizar sus funciones de procuración de justicia, pues como auxiliares del Ministerio Público, tienen la obligación de practicar la diligencia de causalidad de tránsito terrestre y luego, emitir el respectivo dictamen, de manera pronta y expedita, a la autoridad del Ministerio Público solicitante, tal y como lo establecen los artículos 16, fracción I, inciso b) y 45, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, que a la letra dice:

“Artículo 16. Son auxiliares del Ministerio Público: I. Directos, y por ende integrantes de la institución:

a). La Policía Ministerial del Estado; y

b). Los Servicios Periciales.

(...)”.

Artículo 45. La Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

IV. Emitir dictámenes en las diversas especialidades y en los casos y condiciones establecidos por las leyes aplicables, a solicitud de las autoridades correspondientes, dentro de los plazos que determinen, de acuerdo con los principios y reglas de la ciencia, disciplina o arte aplicada;

V. Atender las solicitudes de servicios periciales para que se otorguen con la prontitud que se requiera, a efecto de que las averiguaciones previas se integren debidamente soportadas técnica y científicamente, según cada caso lo amerite;

(...)”.

41. Al respecto, también cabe destacar que el artículo 21, párrafo noveno, de nuestra Constitución Nacional, mandata, entre otras cuestiones, que la seguridad pública es una función a cargo de los Estados, que comprende la investigación y persecución de los delitos para hacerla efectiva, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

43. Asimismo, el citado numeral mandata que la actuación de las instituciones de seguridad pública, entre las que figura por supuesto la Fiscalía, se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución.

44. Por ello, el motivo de reproche para las autoridades señaladas como responsables en la presente recomendación, que evidentemente no están cumpliendo con los principios que la propia Constitución Nacional les mandata, especialmente en lo que se refiere a la eficiencia, el profesionalismo y el respeto a los derechos humanos.

42. La actuación de los auxiliares del Ministerio Público es relevante porque depende precisamente de la intervención de ellos para que en muchos casos pueda conocerse la verdad de los hechos.

42. Aun con todo lo anterior, en el caso, se tiene que dentro de las constancias que integran la Averiguación Previa 1, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9 vulneraron la función pública en el auxilio a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, trasgrediendo en consecuencia el derecho humano de QV1 y V2, al adecuado acceso a la justicia, previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

43. Lo anterior es así, pues tal y como ya se señaló, el 10 de diciembre de 2013, la Agencia solicitó a AR5, la designación de peritos especialistas para la práctica de la prueba pericial de causalidad de tránsito terrestre, la cual fue solicitada mediante oficio número **** y, en respuesta, el 23 de abril de 2014, AR6 y AR7 rindieron el dictamen pericial solicitado ante la Agencia, esto es, después de cuatro meses de su solicitud.

45. Posteriormente, mediante acuerdo dictado el 31 de mayo de 2017, la Agencia solicitó nuevamente al Jefe del Departamento de Servicios Periciales en la Región Sur, la designación de peritos especialistas para la práctica de la pericial de causalidad de tránsito terrestre, determinación que fue notificada el dos de junio de 2017, según oficio número ****, que giró a senda autoridad para tal efecto.

46. Pero fue hasta el dos de enero de 2018, es decir, siete meses después, cuando la Agencia recepcionó el informe rendido por AR8 en el que señaló la imposibilidad de practicar la pericial de causalidad de tránsito terrestre, ya que resultan necesarios ciertos requisitos para su realización.

47. Asimismo, por auto de 21 de mayo de 2018, previo agotamiento de la posibilidad de obtener un video del evento, la Agencia advirtió necesario solicitar nuevamente la prueba pericial de tránsito terrestre para el esclarecimiento de los hechos y ordenó girar oficio a AR9, para que designara peritos especialistas, sin señalar algún apercibimiento de ley ante su incumplimiento, cuyo oficio número ****, fue recibido por dicha autoridad, el día 22 del mismo mes y año en cita.

48. Finalmente, consta que la Agencia continua en espera de recibir el dictamen pericial en cita, por lo que mediante acuerdo de siete de marzo de 2019, ordenó girar un oficio recordatorio dirigido a AR9, sin señalar nuevamente algún apercibimiento de ley ante su incumplimiento.

49. Así, de esta última solicitud, han transcurrido más de nueve meses sin que AR9 y los peritos designados, hayan hecho llegar al Agente del Ministerio Público la pericial solicitada, abonando con ello, a que la investigación continúe estancada y sin posibilidad de emitir la resolución que corresponda.

49. De lo antes expuesto, quedan evidenciados tres lapsos de inactividad por parte de AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9:

50. Primero, del 10 de diciembre de 2013 al 23 de abril de 2014, fecha en que AR6 y AR7 rindieron el dictamen pericial solicitado, **transcurrieron aproximadamente cuatro meses**, desde que AR3 solicitó a AR5 la pericial en comento, sin que obre en la Averiguación Previa 1, causa alguna que justifique dicha demora.

51. El segundo de ellos, fue hasta el dos de enero de 2018, cuando AR8 informó la imposibilidad de rendir el dictamen solicitado por la falta de elementos necesarios, es decir, después de **aproximadamente siete meses**, dio respuesta a la solicitud previamente realizada por la Agencia mediante acuerdo de 31 de mayo de 2017.

52. Por último, se observa que desde la fecha en que fue notificado a AR8, el acuerdo de nueva solicitud para la práctica de la multicitada prueba, el 22 de mayo de 2019, a la fecha de emisión del oficio recordatorio mandatado en acuerdo de siete de marzo de 2019, ha transcurrido un lapso **aproximado de nueve meses**, sin que a la fecha se rinda el dictamen pericial en cita dentro de la Averiguación Previa 1.

53. Por lo antes expuesto, se acredita que AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9 tampoco han realizado sus funciones con la debida diligencia con que están obligados a actuar y en un plazo razonable en la integración de la Averiguación Previa 1, vulnerando con ello, el derecho a una debida procuración de justicia, aunado a que en el caso, la actuación de AR1 y AR3 también fue deficiente al no ordenar con prontitud la realización de diligencias indispensables para solicitar la práctica de la pericial de causalidad de tránsito terrestre y girar los oficios recordatorios correspondientes a dichas autoridades.

54. Con todos los señalamientos referidos previamente queda evidenciado que los servidores públicos de la ahora Fiscalía General del Estado han violentado lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.”

55. Ello es así, porque como ya se mencionó en párrafos precedentes, el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia, particularmente en el caso de la justicia penal, se encuentra estrechamente vinculado con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos.

56. En este sentido, el deficiente desempeño materializado por el abandono del caso relacionado con la Averiguación Previa 1, atribuido a la institución del Ministerio Público, representada en Sinaloa por los servidores públicos de la Fiscalía, quienes han desempeñado el importante papel de conducir la

investigación de los presuntos hechos delictivos puestos en su conocimiento y de auxiliar en la investigación y esclarecimiento de los hechos, ha propiciado la violación al derecho humano de acceso a la justicia en perjuicio de QV1 y V2.

57. Acorde a lo establecido por el artículo 3° del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el Ministerio Público, en el ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción penal, debe practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, acreditar la probable responsabilidad, así como la reparación del daño.

58. Sin embargo, para poder emitir cualquier resolución, ya sea el ejercicio de la acción penal o bien el no ejercicio, deberá primero contar con las probanzas necesarias derivadas de una debida integración de la averiguación previa que sirva para esclarecer los hechos, situación que se ha dejado de observar en el trámite de la señalada Averiguación Previa 1, todo en perjuicio del derecho de acceso a la justicia de QV1 y V2.

59. Lo anterior, aun cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, les mandaba procurar la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho, apegando su proceder a los principios de unidad de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

60. En el caso que nos ocupa, los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, han incumplido con la debida integración de la Averiguación Previa 1, esto es, no han realizado una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, lo que ha propiciado que a la fecha no se hayan esclarecido los hechos denunciados, especialmente por los largos periodos de inactividad a los que se ha sometido la investigación.

61. Es evidente que, dicha inactividad ha propiciado que la indagatoria penal en comento, no haya sido resuelta con la prontitud debida.

62. El simple hecho de que la Averiguación Previa en comento, después de más de **72 meses (seis años)** de iniciada, aún continúe en trámite, constituye evidencia bastante para acreditar que se ha incurrido en una marcada dilación en la investigación y resolución del caso.

63. La falta de actuación de la autoridad en estos casos, propicia un clima de impunidad nada favorable socialmente, pues se envía el mensaje equivocado al

probable infractor de la norma, de que puede seguir violentándola, pues no percibe reacción estatal alguna como consecuencia de su actuar.

64. Asimismo, la falta injustificada de actuación en la integración de una indagatoria penal orientada a acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, retrasa el ejercicio de un derecho humano fundamental de las víctimas del delito, como lo es el derecho a acceder a la administración de justicia por parte de un tribunal independiente e imparcial, ocasionando que no se sancione a la brevedad posible, a los eventuales responsables y, que la víctima del delito, no acceda con prontitud a la reparación del daño a que tiene derecho.

65. Lo expuesto, viene a evidenciar una ausencia de acción por parte de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía y con ello, una transgresión al artículo 21 constitucional, el cual establece claramente que la investigación de los delitos compete al Agente del Ministerio Público. En ese sentido, se pronuncian también los artículos 3º, 9º y 59 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa.

66. Ahora bien, además de transgredir la legislación local, con su desempeño, los mencionados servidores públicos han violentado, también, algunos instrumentos jurídicos internacionales tales como:

- **Convención Americana sobre Derechos Humanos:**

Artículo 8.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

- **Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:**

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra los actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos consagrados constitucionalmente.

67. Así, de los ordenamientos legales invocados se advierte la omisión de los servidores públicos de la Fiscalía, quienes han incumplido con la tarea de investigar y perseguir delitos y auxiliar en la procuración de justicia, actividad que en el sistema de justicia tradicional de manera monopólica la ley, les confiere en

perjuicio de QV1 en su calidad de víctima indirecta, al no procurarle debidamente la justicia que reclama.

68. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, señalando que “los agentes del Ministerio público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la Averiguación Previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos”.

b) HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Irregular integración de la averiguación previa.

69. Como se señala en párrafo previo, los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3º del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa; y, 6, fracción V y 9, fracción IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, establecen como facultades del Ministerio Público de Sinaloa, la obligación de practicar dentro de la averiguación previa las diligencias necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos que la originó.

70. Teniendo en cuenta lo sustentado en éstas normas generales, esta Comisión Estatal considera que, en el caso en análisis, también se materializó la violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por la irregular integración de la Averiguación Previa 1.

71. Ello es así, porque los servidores públicos de la Fiscalía encargados de las investigaciones correspondientes, no actuaron con la debida diligencia al omitir realizar las acciones pertinentes para su adecuada integración, lo que ocasionó que, hasta el momento, no se cuente con las pruebas suficientes para esclarecer los hechos y por qué tales omisiones ocasionaron que no se haya gestionado integrar a la citada indagatoria, de manera oportuna, evidencia relevante que luego por el transcurso del tiempo ya no fue posible obtener.

70. Efectivamente, de las evidencias reseñadas y analizadas que integran la Averiguación Previa 1, se advierte que el 3 de abril de 2013, QV1 presentó denuncia o querrela por escrito en contra de C1, por el delito de homicidio culposo cometido en agravio de V2. Además, solicitó se practicaran y desahogaran diversas diligencias, entre ellas, que se solicitara un informe al Centro de Control,

Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para que remitiera el video de la cámara de vigilancia que se encuentra ubicada en las avenidas donde ocurrieron los hechos denunciados con la finalidad de acreditar la responsabilidad de la persona que dice atropelló a V2.

71. Por lo anterior, AR3, quien fungía como titular de la Agencia, solamente recepcionó dicha denuncia y fue ratificada por QV1 en esa misma fecha, sin que en ese momento realizara pronunciamiento alguno sobre la probanza que QV1 ofreció, consistente en la obtención del video de la cámara de vigilancia del citado Centro de Control, Comando y Comunicación, que aparentemente se encontraba en el lugar de los hechos, y lo más grave, no se gestionó el desahogo de dicha probanza sino hasta cinco años después.

72. Efectivamente, de la propia Averiguación Previa 1, se desprende que fue hasta el 15 de marzo de 2018, esto es, aproximadamente cinco años después, cuando AR1, actual titular de la Agencia, solicitó el video de la cámara de vigilancia instalada en el lugar de los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2013, aproximadamente a las 14:30 horas, y en respuesta a lo solicitado, el Delegado del Sub-Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia de la Zona Sur, informó a AR1 la imposibilidad de remitir el video petitionado, ya que el rango de video grabaciones de la base de datos del sistema integral de video vigilancia urbana de la ciudad de Mazatlán, comprendía del periodo del 20 de febrero de 2018, hasta la fecha que rindió el informe.

73. En ese sentido, es evidente que, ante la omisión y/o tardanza en solicitar oportunamente la videograbación de las cámaras de vigilancia ubicadas en el lugar de los hechos, probanza solicitada por QV1 en el escrito de denuncia y/o querrela desde el 3 de abril de 2013, ocasionó que, de manera irremediable, se borrara o perdiera la probable evidencia que obraba en dicha videograbación que regularmente es almacenada por cierto periodo en el sistema del Centro de Control, Comando y Comunicación, probanza que por su relevancia y contundencia pudo haber sido determinante para dilucidar la investigación; de ahí que, dicha irregularidad, afectó el derecho de QV1 de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.

74. De lo anterior, se concluye que los distintos agentes del Ministerio Público adscritos a la Agencia, que en su carácter de auxiliares o titulares, han tenido a su cargo la Averiguación Previa 1, desde que esta inició, hasta la fecha del último informe rendido ante esta Comisión Estatal, omitieron realizar sus funciones de manera oportuna y adecuada, con lo que impidieron y limitaron el acceso a la justicia de QV1.

75. En ese orden de ideas, es evidente que los servidores públicos de la Fiscalía a cuyo cargo tuvieron la investigación no realizaron sus funciones de Averiguación

Previa 1, de manera oportuna, ocasionando con su desempeño una irregular integración de la misma, al permitir que el medio probatorio relevante se perdiera por el transcurso del tiempo.

76. Con todo lo anterior es evidente que además de los numerales apenas citados en éste apartado, también se violentó lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno, Constitucional, por la inobservancia de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, principios que deben observar todas las instituciones de seguridad pública, entre las que figura por supuesto la Fiscalía.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: A la seguridad jurídica.

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público.

69. El artículo 1° de la Constitución Nacional, en su párrafo tercero, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

70. En términos similares se pronuncian los diversos 1 y 4 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al establecer que el Estado tiene como fundamento y objetivo último, la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales que le son inherentes, los cuales vinculan a todos los poderes públicos.

71. Por otra parte, el artículo 109 de la Constitución Nacional, establece que los servidores públicos al ejercer indebidamente sus atribuciones pueden incurrir en responsabilidad política, penal o administrativa. En similares términos se pronuncia el artículo 130, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

72. Atento a ello, puede decirse que la conducta que en ésta vía se reprocha a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y quien resulte responsable, pudieran acarrearles responsabilidades administrativas, al haber quedado acreditados hechos violatorios de derechos humanos.

73. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos que se deriva de los actos u omisiones en que incurren en el desempeño de sus atribuciones, la contempla, atendiendo a la época en que han ocurrido los hechos, la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado

de Sinaloa, y en el presente caso, también la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, teniendo en cuenta la dependencia de la cual son parte los servidores públicos involucrados y los asuntos correspondientes al sistema penal tradicional analizados en la presente resolución.

74. Por lo que hace a la señalada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su numeral 3°, establece que los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan en sus deberes o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley, así como en aquellas que deriven de otras leyes y reglamentos.

75. A su vez, el cuerpo normativo recién citado, en su diverso artículo 14, señala que los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de conducirse ajustándose a las disposiciones contenidas en esa propia ley, para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, entre otros.

76. En el presente caso, se tiene acreditado que AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y demás personal de la Fiscalía General del Estado que ha tenido asignado el expediente de Averiguación Previa 1, por lo menos, han violentado los principios de legalidad y eficiencia a que hace mención el artículo 14 apenas citado.

77. Así, el actuar violentando alguno de estos principios que rigen el servicio público, necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado, el cual deberá necesariamente ser sujetos de alguna responsabilidad.

78. Se considera además que la violación de los principios que ya se mencionaron, derivó en la trasgresión del artículo 15, en sus fracciones I y VIII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en las que señalan los siguientes.

Artículo 15. *Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:*

I. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;

(...)

VIII. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tengan relación en el desempeño de su función; y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

(...)

79. Por otro lado, resulta necesario destacar que, de conformidad con los artículos 3° y 4°, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, los agentes del Ministerio Público tienen la finalidad de procurar la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho, apegado su proceder a los principios de unidad de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

80. Igualmente, se advierte que se violentó el artículo 71 fracción I y II de la anteriormente citada Ley, mismo que dispone lo siguiente:

***Artículo 71.** Además de las señaladas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son obligaciones, y su incumplimiento será causa de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, de los Agentes de Policía Ministerial del Estado y de los Peritos al servicio de la Procuraduría General de Justicia, las siguientes:*

I. Conducirse en su función con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

II. Practicar las diligencias necesarias en cada caso.

(...)

81. Entonces, tenemos que la actuación del personal a cuyo cargo haya estado la integración de la Averiguación Previa 1 y el auxilio en la investigación del caso, son directamente responsables de haber dejado de indagar y agotar todas las líneas de investigación dentro de la misma, a fin de estar en aptitud de resolver adecuadamente los asuntos puestos a su consideración, esto es, esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

82. El hecho de que se haya dejado de actuar dentro del citado expediente de Averiguación Previa 1 por periodos prolongados de manera injustificada y de haber permitido que la indagatoria penal no fuera resuelta de manera pronta ha propiciado la acreditada dilación que ya analizó en párrafos que anteceden.

83. En ese sentido, al haber quedado plenamente acreditado que los servidores públicos de la Fiscalía ejercieron indebidamente sus atribuciones, necesariamente debe investigarse tales conductas, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas que resulten.

84. Resulta aplicable al presente caso, la siguiente tesis jurisprudencial, por considerar que tienen relación con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la función de todo servidor público.

Novena Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Marzo de 2003

Tesis: I.4o.A.383 A

Página: 1769

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. *La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones –que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la*

prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO. Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

85. Por todo lo anterior y como consecuencia de ello, es necesario que tales hechos sean investigados por el correspondiente órgano interno de control, y en virtud de lo anterior se apliquen las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan.

86. En tal sentido, con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en nuestra entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa de manera respetuosa se permite formular a usted, señor Fiscal General del Estado de Sinaloa, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. En caso de que la Averiguación Previa 1, aún no hayan sido resuelta, se dé prioridad a su atención y se realicen todas las diligencias que técnica y jurídicamente resulten necesarias y se resuelvan a la mayor brevedad posible lo que en derecho proceda. Asimismo, se notifique a esta Comisión Estatal y a QV1, la resolución correspondiente, a fin de que esté en aptitud de realizar las acciones legales que estime convenientes.

SEGUNDA. Se inicie y tramite procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y demás personal a cuyo cargo haya estado la Averiguación Previa 1, y que haya propiciado los prolongados periodos de inactividad reclamada en la presente resolución, procedimientos a los que debe agregarse copia de la presente Recomendación, para que de conformidad con las leyes de responsabilidad administrativa aplicables, se impongan las sanciones que resulten procedentes, informándose a esta Comisión Estatal del inicio, desarrollo y conclusión de los procedimientos respectivos.

TERCERA. Se dé a conocer el contenido de la presente Recomendación entre los integrantes de la Fiscalía, ello con el ánimo de evitar la repetición de los actos similares a los que por esta vía se reprocha, informándose a esta Comisión Estatal, los mecanismos empleados para ello y el tiempo en que esto se realice.

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se impartan cursos de capacitación entre los servidores públicos de la Fiscalía, para evitar que se incurra en violaciones a derechos humanos como las que dieron origen a la presente recomendación; asimismo, se envíe a este organismo estatal prueba de su cumplimiento.

QUINTA. Se generen los controles administrativos necesarios para evitar la dilación y las irregulares integraciones de las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía, informándose a esta Comisión Estatal sobre las acciones implementadas al respecto.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

87. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

88. Notifíquese al Doctor Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado de Sinaloa, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número **14/2019**, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del suscrito.

98. Que de conformidad con lo sustentado por el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, cuenta con un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, para que manifieste a esta Comisión Estatal, si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, funde, motive y haga pública la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o por cualquiera otra razón resulten inatendibles.

99. Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

100. También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

92. En ese sentido, el artículo 1° y 102, apartado B, segundo párrafo de la misma, señalan lo siguiente:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

“Artículo 102.

(...)

B. (...)

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos

órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

96. En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

97. En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

98. Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional.

105. En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero del multicitado artículo 1° constitucional.

106. Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, las Recomendaciones no son vinculatorias, pero una vez aceptadas, la autoridad o servidor público está obligado a cumplirlas en sus términos, en atención al respeto y cumplimiento de los derechos humanos que constitucionalmente se les exige.

107. Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

108. La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

109. Notifíquese a QV1 en su calidad de víctima, dentro de la presente recomendación, remitiéndosele con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega

Presidente